

Agradecer en primer lugar a la universidad pública su preocupación por la propuesta de los partidos políticos. En el caso de Izquierda Unida, nuestra propuesta en materia universitaria, parte de los principios básicos de interés social y autonomía universitaria. Ambos conceptos confluyen en nuestros programas de futuro para la enseñanza universitaria. El interés social requiere de Universidades plenamente autónomas, capaces de gobernarse por sí mismas a partir de la participación democrática del conjunto de sus miembros y con una gestión profesionalizada, como base para rendir cuentas ante los poderes públicos del uso de los fondos públicos proporcionados por la sociedad para atender a sus necesidades de una docencia e investigación universitarias de alta calidad cuyos resultados puedan ser transferidos a la misma en el marco del dominio público y el interés social de dichos resultados.

¿Tiene definida su candidatura alguna política concreta de **creación o transformación de titulaciones**? Y, si es así, ¿Cuáles serían estas? ¿En qué condiciones debe llevarse a cabo la creación o transformación?

Carece de sentido pretender adaptar los estudios universitarios a un mercado cuya volubilidad haría que en muchos casos las materias específicas introducidas con ese criterio hubieran devenido obsoletas al finalizar los estudios.

Es mucho más racional fomentar una formación básica y polivalente que capacite a los licenciados de las Universidades, no para adaptarse a la situación existente, sino para incidir creativamente en la misma, vertiendo y desarrollando los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora, cosa que requerirá por otra parte profundos cambios en la estructura económica vinculados a un modelo alternativo de desarrollo social y humano.

La delimitación de los objetivos debe de llevarse a cabo a través de la innovación en el trabajo vinculada a un Desarrollo tecnológico que aplique los resultados de la Investigación científica, invirtiendo recursos públicos en la investigación de carácter público, a través de las universidades y de los centros públicos de investigación, como el CSIC, y que se retroalimente con el tejido productivo del territorio, tanto público como privado, orientándose siempre hacia un desarrollo social y medioambientalmente sostenible.

Tras la aprobación del Real Decreto 43/2015, que modifica la estructura de las enseñanzas universitarias, la CRUE adoptó una moratoria de dos años para la implantación de **grados de 3 años**. ¿Cuáles son las propuestas de su candidatura sobre esta cuestión? Si considera necesario introducir cambios con respecto a la situación actual, **¿Quién debe asumir el coste de este cambio?**

IU ha denunciado reiteradamente el sistema '3+2' porque, entre otros motivos, el acceso a la formación superior supondrá costes inasumibles para la

gran mayoría de las familias ante el elevado coste de los másteres. Esta norma supone, además, la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario. Además, no existe una evaluación de la implantación de esta modificación legislativa de los nuevos grados y una justificación creíble de las propuestas.

El mencionado decreto por el que se modifican las enseñanzas universitarias y las enseñanzas oficiales de doctorado, que permitirá a las universidades implantar carreras de 3+2 -tres años de grado y dos de máster, frente al sistema actual de 4+1- supone una nueva imposición de José Ignacio Wert. El Gobierno le dio vía libre por el empujamiento del ministro, pese al varapalo a su contenido por parte del Consejo de Estado, pese a la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin que haya habido un debate con la comunidad universitaria. Tampoco lo hubo a nivel político ni social y no existe una evaluación de la implantación de esta modificación legislativa de los nuevos grados y una justificación creíble de las propuestas.

En definitiva lo que se pretende es establecer un 'corte selectivo' en la educación superior, recortando su acceso mayoritario de 5 a 3 años. Y privar así de valor a los títulos de grado universitarios, los más accesibles, condenando a lo/as jóvenes a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esta reducción supone también recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los cinco años de las licenciaturas, ahora sólo serán los tres de grados, trasvasando a las familias el coste global de los másteres y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad.

Izquierda Unida considera que si se quiere optar por una vuelta al 3+2 para homologarnos con buena parte de los países europeos, eso exigiría homologarnos también en la financiación pública de las universidades. Las tasas de los másteres deberían tener el valor de las tasas de las antiguas licenciaturas -mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la Universidad-, como ya sucede en 11 países europeos de nuestro entorno, aplicando de forma inmediata esta gratuidad en los grados.

¿Qué aspectos de su programa están destinados a fomentar la movilidad internacional de los estudiantes y del personal universitario? ¿Cuáles son sus previsiones presupuestarias?

El programa Erasmus es el más importante de los que la UE tiene para favorecer la integración y la movilidad europea. La movilidad estudiantil y laboral dentro de la UE en el marco de estos programas es necesaria para las relaciones interpersonales dentro de Europa que son, al fin y al cabo, las relaciones que importan de cara a crear una conciencia europea lejos de las grandes convenciones entre élites de países.

IU aboga por la recuperación e incremento de las becas de movilidad, como son las Erasmus, las Séneca y las becas Leonardo, así como por una reserva de

plazas Erasmus para personas con discapacidad asegurándoles que dispondrán de las mismas adaptaciones y servicios que en el país de origen en el período de duración de la beca.

Por lo que respecta a la financiación, y desde la consideración de estos programas en su ámbito nacional y europeo, nos remitimos a nuestra propuesta de financiación para la universidad pública con un dos por ciento del PIB.

A diferencia de otras comunidades autónomas, la de Aragón no cuenta con figuras propias de Personal Docente e Investigador que permitan flexibilidad en la contratación para adecuarse a las necesidades existentes en este terreno. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido?

Como en otras muchas cuestiones, es preciso un diálogo fluido con la Universidad para hacer frente a las situaciones a las que se enfrenta. A pesar de los recortes del Gobierno de la DGA, se ha producido una cierta estabilización, así como la posibilidad de promoción del personal docente e investigador, del que la Universidad cuenta con una plantilla acreditada mediante evaluación externa. Sin embargo, la necesidad de una flexibilización en la contratación, debe de combinarse, como establecen nuestros programas con una limitación a un máximo del 40% la plantilla de personal docente e investigador con contrato laboral temporal.

¿Piensa situar el gasto de I+D+i por encima de la media española, por encima de la europea o mantenerlo en los niveles actuales? ¿Cuáles son sus propuestas para la captación y retención de talento?

Es preciso incrementar el gasto en I+D+i hasta aproximarse a las 25 regiones europeas más relevantes en este sentido.

El objetivo de Izquierda Unida es impulsar la I+D+i como elemento de creación de empleo de calidad con valor añadido y mejores condiciones laborales. Y para ello apuesta por duplicar la inversión pública hasta alcanzar un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a investigación e innovación. Pero dedicar los recursos en una estrategia de transversalidad que llegue a todos los departamentos o favoreciendo la movilidad de los investigadores a través de una ley aragonesa que lo fomente y regule.

Hay que tener en cuenta que, aunque contamos con un importantísimo número de jóvenes en prácticas pese a haber acabado sus estudios y que más de un sesenta por ciento de los estudiantes aragoneses no han percibido compensación alguna por su último periodo de prácticas, y el porcentaje restante considera mayoritariamente que su compensación no fue suficiente para cubrir sus gastos básicos. En estas condiciones, es sencillo comprender que muchos de estos han optado por la emigración a regiones donde encuentran reconocimiento y compensación. Eso hace de la incorporación al mercado normalizado de trabajo de los jóvenes investigadores el elemento capital de su vinculación al territorio.

Por lo que respecta a la investigación fundamental o básica, aquella que permite generar nuevo conocimiento independientemente de sus posibles aplicaciones directas o inmediatas ¿Qué medidas incluye su programa para potenciarla? ¿Cuáles son sus previsiones para su financiación?

La Universidad no puede vincular su actuación exclusivamente a aquellos aspectos que tienen una traslación directa al sistema productivo. Es preciso concienciarse de su papel en la formación individual y social en conocimientos y habilidades esenciales para la mejora de las personas y de los grupos humanos que la conforman. El desarrollo de una sociedad que utilice la razón para relacionarse con su entorno, que se dote de un espíritu crítico y que sea capaz de disfrutar de la naturaleza y la cultura están en la esencia misma de la Institución Universitaria. Y los programas dedicados a ello, deben de contar con dotación adecuada dentro de los presupuestos universitarios.

¿Cuáles son para su candidatura los sectores estratégicos en los que debe centrarse la investigación en Aragón?

Izquierda Unida apuesta por potenciar y financiar modelos alternativos de investigación que promuevan un desarrollo sostenible y por asegurar el carácter público de los resultados de toda investigación financiada con fondos públicos

El objetivo de Izquierda Unida es impulsar la I+D+i como elemento de creación de empleo de calidad con valor añadido y mejores condiciones laborales. Y para ello apuesta por duplicar la inversión pública hasta alcanzar un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a investigación e innovación. Pero dedicar los recursos en una estrategia de transversalidad que llegue a todos los departamentos.

¿Qué medidas incluye su programa para fomentar la transferencia de conocimiento desde la Universidad a las empresas? ¿Prevé la creación de deducciones fiscales para las empresas que inviertan en I+D+i? ¿Y para la creación de empresas de base tecnológica?

Izquierda Unida plantea comenzar por la universidad, como elemento clave para apostar por el conocimiento, pero también en todas las áreas de gestión. En política fiscal, ofreciendo bonificaciones a empresas que inviertan en I+D+i,

Los resultados de la investigación científica y tecnológica, subvencionada con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión. La pretensión de derechos exclusivos para el uso del conocimiento ha sido un factor insolidario y retardatario del desarrollo tecnológico desde la misma invención de la máquina de vapor, pero ese efecto es mucho más grave en un mundo en el que las técnicas utilizadas derivan en una gran proporción del uso directo de las ciencias.

Así mismo, es preciso un Plan regional de investigación adecuado a las necesidades sociales y económicas que asegure la coordinación y cooperación entre Universidades, los organismos públicos de investigación y los agentes sociales.

¿Es partidaria su candidatura del cumplimiento del acuerdo firmado el 23 de marzo de 2011 por la Universidad y el Gobierno de Aragón para cambiar esta situación? Si es así, ¿Cómo llevará a cabo los pagos pendientes? Si no lo es, ¿Qué modelo de financiación propone para la Universidad y cuáles serían sus componentes concretos?

Rotundamente partidarios del cumplimiento de estos acuerdos. Es vergonzoso que la Universidad de Zaragoza se vea obligada a reclamar por vía judicial cincuenta y tres millones y medio de euros al gobierno de Aragón por el

incumplimiento de sus acuerdos. Para cambiar esta situación, basta con una atención mayor a la Universidad y una verdadera intención de responder a las necesidades de la Universidad Pública. Es preciso un compromiso de buscar las fórmulas de financiación que permitan hacer frente a esta deuda a la mayor brevedad posible.

Las comunidades autónomas tienen la competencia de fijar los precios públicos de los grados y másteres universitarios. Generalmente se habla de dos modelos en cuanto a precios públicos, el británico y el continental, que se diferencia en quién soporta principalmente el coste de los estudios. ¿Qué modelo propugna su candidatura? ¿Deben incrementarse, mantenerse o reducirse? ¿Piensa promover programas propios de becas y ayudas al estudio? Actualmente, los precios públicos de los másteres oficiales (salvo los que habilitan para el ejercicio profesional) son muy superiores a los de los grados. ¿Debe seguir siendo así?

Frente al incremento de los costes universitarios que está suponiendo la imposibilidad de acceder o de continuar estudios para extensa capas de población española, devolviéndonos a etapas pretéritas, Izquierda Unida apuesta por la financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. En los países nórdicos los estudios universitarios son gratuitos; en Austria, Alemania o Escocia la matrícula es gratuita; en Francia la matrícula requiere tan sólo el pago de una tasa fija (183 € por año). Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y con respecto a los másteres, ya hemos explicitado nuestra oposición al sistema 3 + 2, y a sus costes. IU aboga por paralizar la llamada "Estrategia Universidad 2015" y abrir un debate entre toda la comunidad universitaria para consensuar una alternativa compartida de universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del mercado.

¿Qué elementos debe contener el nuevo Plan de Infraestructuras para la Universidad de Zaragoza? ¿Cuáles serían las prioridades de su Gobierno en este terreno? ¿Qué medidas propone para resolver las consecuencias de la falta de presupuesto en mantenimiento de los edificios de la Universidad de Zaragoza durante los últimos años?

Compartimos los objetivos de descentralización, asentamiento de los campus temáticos, convergencia europea y modernización de instalaciones que conforman el "Plan de Infraestructuras: Universidad de Zaragoza 2012" Y en cuanto a su financiación, Sólo la financiación pública de las Universidades Públicas, proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades sin tener que recurrir a una financiación privada, posibilita que el uso de los fondos se oriente únicamente por la racionalidad académica y esté sometido a un control democrático que garantice que dicho uso esté regido exclusivamente por el interés público.